

Salamanca, Guanajuato, a 29 veintinueve de Enero de 2021 dos mil veintiuno, encontrándose debidamente integrado el expediente **JAM-58/2020**, promovido por **Maria Elizabeth XXXXXXXXX** por su propio derecho, en los siguientes términos;

## RESULTANDO

**PRIMERO. Promoción de la demanda.** Por escrito presentado ante este Juzgado Administrativo Municipal el 13 trece de agosto de 2020 dos mil veinte, suscrito por quien se indica en el proemio de la presente resolución, impugnando los siguientes actos administrativos:

- I. La boleta de infracción con número de folio **XXXXXX**, la cual le fue notificada el 23 veintitrés de julio de 2020 dos mil veinte.
  
- II. La calificación de la infracción con número de folio **XXXXX**, del 28 veintiocho de julio de 2020 dos mil veinte referida en el punto anterior, en la que se determinó un crédito fiscal por la cantidad de \$695.00 (seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 en M/N).

Además, solicitó a) La declaración de nulidad de dicho acto, b) El reconocimiento de un derecho para obtener la devolución de la cantidad que erogó con motivo de un acto administrativo que a su juicio resulta ilegal y la abstención a la inscripción de cualquier registro negativo c) La condena a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de los derechos violentados.

**SEGUNDO. Admisión de la demanda.** Mediante auto de fecha 31 treinta y uno de agosto de 2020 dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se requirió a la Dirección de Vialidad y a la Coordinación de Oficiales Calificadores para que en el término de 3 tres días, proporcionaran el nombre de los servidores públicos de quien realizó la boleta de infracción como de quien la calificó. Esto para que puedan ser emplazados legalmente.

Además, con fundamento en el artículo 279 y 283 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se corrió traslado de la demanda a la Tesorería Municipal de Salamanca, y a la persona moral denominada “Grúas **XXXXXXX**” en calidad de terceros con un derecho incompatible con la pretensión del actor.

Se tuvo por admitidas las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas en su escrito inicial de demanda, así como la presuncional legal y humana en todo lo que le favorezca. Se le tuvo por señalado autorizados legales y domicilio para recibir notificaciones, además manifestó que no consiente la publicación de sus datos personales.

**TERCERO. Contestación de la demanda.** Por auto de fecha 18 dieciocho de noviembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo a la Dirección de Vialidad y a la Coordinación de Oficiales Calificadores, por proporcionando el nombre de los servidores públicos. Por lo que se emplazo a el agente vial, y oficial calificador, autoridades demandadas para que dieran contestación a la demanda entablada en su contra.

Asimismo, se tuvo al tesorero municipal por compareciendo al presente proceso en tiempo y forma así como objetando los documentos que aluden en el escrito inicial de demanda, lo anterior con fundamento en el artículo 86 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En auto de fecha 18 dieciocho de diciembre de 2020 dos mil veinte se tuvo a las autoridades por contestando en tiempo y forma la demanda entablada en su contra. Así como proporcionando autorizados legales, domicilio porcesal para oír y recibir toda clase de notificaciones. Así como también se les tuvo por admitidas las pruebas que luden en su contesción acreitando la personalidad de ambos.

Finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de audiencia de alegatos.

**CUARTO. Audiencia final del proceso.** Legalmente citadas las partes, siendo las 12:00 doce horas con cero minutos del 18 dieciocho de enero de 2021 dos mil veintiuno, la parte actora y el tercero con un derecho incompatible al del actor presentaron sus alegatos por escrito.

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. Competencia.** Este juzgado Administrativo Municipal con sede en Salamanca, Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente proceso, de conformidad con los artículos 1, fracción II y 263 párrafo primero del Código de Justicia Administrativa de Guanajuato; así como lo previsto por los artículos 241, 243 segundo párrafo, 244 y 246, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

**SEGUNDO. Certeza del acto impugnado** la existencia se tiene por acreditado con copia certificada de la boleta de infracción con número de folio **XXXXX** -foja 28-,m¿ misma que hace prueba plena de la existencia del acto, emitida por la autoridad demandada, emitida el 23 veintitres de julio de 2020 dos mil veinte adminiculada con la confesión realizada por la autoridad encausada al momento de contestar la demanda en cuanto expresó que era cierto la elaboración de la infracción impugnada.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 48 fracción I, 117,118, 123 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En cuanto a la calificación se tiene por acreditada dentro de la de la factura original **XXXXXXXX** -foja 10- emitida por la autoridad exactora, en la cual se aprecia el pago de la multa que aparejó el acto referido.

Comprobante fiscal que por sus características en cuanto a sello oficial, firma, membrete del municipio de Salamanca, Guanajuato, el haber sido expedido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, es un documento público con valor probatorio pleno para acreditar que el ahora actor realizó el pago del acto combatido, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por los artículos 78, 117 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**TERCERO. Las causales de improcedencia y sobreseimiento.** Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y, por tanto, de estudio oficioso y preferente.

En esa tesitura se analizará la que hacen valer la autoridad demandada, quien en síntesis expresaron lo siguiente:

“...opongo la excepción de falta de agravio personal y directo en la esfera jurídica del demandante...”

En cuanto a la falta de interés jurídico del actor lo expuesto por la autoridad demandada y el tercero en el proceso resulta infundado atento a las siguientes consideraciones.

Del folio de infracción **XXXXXX** se desprende que el agente vial en el rubro del conductor asentó de manera literal al igual que en la factura de pago viene dirigido “A quien Corresponda” (sic), por lo tanto, el acto administrativo no tiene destinatario determinado.

Ante tal indeterminación del sujeto al cual se dirige el acto impugnado, la autoridad abrió la posibilidad de que cualquier persona se sintiera afectado en su esfera jurídica con el acto de autoridad y, por lo tanto, acudir ante este órgano de control jurisdiccional a demandar su nulidad.

Entonces sí, Maria **XXXXXXX** Requena, acude a promover el presente proceso como afectada por la imposición de la boleta de infracción y ejecutor del pago de la multa, teniendo en su poder el documento original en que obra el recibo de pago de la multa que acarreó la infracción multicitada, su interés jurídico lo acredita con la documental pública consistente en factura **XXXXXXX** visible en -foja 08-, al estar dirigida a nombre de la parte actora, pues se desprende que la justiciable, en fecha 28 veintiocho de julio de 2020 dos mil veinte, pagó la cantidad de \$695.00 (seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 en Moneda Nacional), crédito fiscal emanado del folio de infracción refutado.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 117, 121 y 131 del *Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato*.

Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis aislada, que se aplica por analogía y que fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y que a la letra establece:

**<<INTERES JURIDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE.** Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad **debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio**, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia.>>

Por otro lado, en cuanto al señalamiento que hace el tercero con un derecho incompatible al del actor, respecto de la legalidad de su actuación y su percepción acerca de que por ello este proceso es improcedente, debe señalarse que la materia de controversia en este caso es precisamente la definición de la legalidad del acto combatido, razón por la que no puede traducirse en una causa de improcedencia o de sobreseimiento establecidas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues sus consideraciones se refieren a la legalidad del acto impugnado.

Dado lo anterior, debe desestimarse el planteamiento en cuestión, tal y como lo advierte la jurisprudencia número P./J. 135/2001, que dicta:

**“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.** Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse”.<sup>1</sup>

Dicho de otro modo, las alegaciones de la autoridad se refieren al estudio de la cuestión de fondo del asunto, razón por la que sus planteamientos no constituyen una de las causas antes señaladas y, por ende, es preciso desestimar su estudio en este apartado.

Por lo anteriormente expuesto y al no actualizarse alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 261, en relación con el 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los

---

<sup>1</sup> Tesis P./J. 135/2001, jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV de enero de 2002, página 5.

Municipios del Guanajuato, **NO SE SOBRESEE EL PRESENTE PROCESO ADMINISTRATIVO.**

**CUARTO.** Se precisa a las partes que no se transcribirán íntegramente los conceptos de impugnación expuestos por el accionante, ni los argumentos esgrimidos por la autoridad demandada. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a. /J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es del tenor literal siguiente:

**«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.** De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer».

**QUINTO.** En el concepto de impugnación donde se señala por la parte actora la competencia de la autoridad demandada cabe a bien señalar la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis número XVI.1º.A.T.J/11, sustentada Por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXIX, de junio de 2009 dos mil nueve,

consultable a página 878, que es del tenor literal siguiente:

<<COMPETENCIA. LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA SENTENCIA, ES INDICATIVO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONSIDERÓ OFICIOSAMENTE QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA ES COMPETENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL OCHO). El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, al analizar de oficio la competencia de la autoridad demandada, no se encuentra obligado a realizar un pronunciamiento expreso en la sentencia, cuando considera que la autoridad es competente, pues si bien, de conformidad con el artículo 302, fracción I y último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el juzgador podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la falta de competencia de la autoridad para dictar el acto impugnado y la ausencia total de fundamentación o motivación en éste, ello no significa que el órgano jurisdiccional se encuentre facultado discrecionalmente para examinar ese tema cuando lo considere conveniente, pues la connotación sobre la importancia del aspecto de la "competencia" que se reconoce de ese estudio, orientan la conclusión de que el uso que le procuró el legislador al incluir el verbo "podrá", no es para identificar una facultad potestativa, sino una obligación para el resolutor de que siempre y en todos los casos se pondere la competencia de la autoridad que emite el acto o instruye el procedimiento porque es un aspecto que interesa a la comunidad. De ahí que, en el supuesto de que el citado tribunal, al analizar oficiosamente la competencia de la autoridad administrativa considere que es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada; empero, si estima que es competente, no se encuentra obligado a plasmar esa consideración en la sentencia que emita, pues esa falta de pronunciamiento es indicativo de que el juzgador asumió que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad, lo que se corrobora con la circunstancia de que continuó con el análisis de la procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la controversia. >>

Quien resuelve considera **fundado** el concepto de impugnación en donde la parte actora argumenta que el folio de infracción XXXXX, se emitió sin contener una debida fundamentación y motivación de conformidad con los siguientes razonamientos jurídico:



El artículo 137, fracción VI del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, señala como elementos de validez del acto administrativo, la debida fundamentación y motivación.

En ese orden de ideas, tratándose de una boleta de infracción en materia de vialidad, la fundamentación debe traducirse en el señalamiento preciso de los preceptos legales aplicables al caso, mientras que, por motivar, debe entenderse como el señalamiento preciso y detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el razonamiento jurídico donde se explique por qué esos hechos actualizan la hipótesis contenida en el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca, Guanajuato.

Sirve de sustento al argumento vertido supralíneas, la siguiente Jurisprudencia, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, página 622, Tesis No. VI. 2º. J/31, que a la letra dice:

**<<FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.** Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. >>

En la especie la autoridad demandada señala con una “X” el motivo y fundamento de la supuesta infracción cometida por la impetrante, los cuales a la letra dicen:

“Estacionarse en lugar prohibido”.

Lo anterior, si bien es cierto que se cita como fundamento el artículo 105 (RVMS), del Reglamento de Vialidad del Municipio de Salamanca, Guanajuato, el cual establece:

<<Artículo 105.- Todo vehículo cuando esté estacionado en lugar prohibido, deberá ser infraccionado y podrá ser retirado por elementos de la Dirección.<<

**La demandada, sin embargo, en el apartado “En caso de no respetar un señalamiento de vialidad mencionar su tipo y ubicación”:** (NO SE HZO DESCRIPCIÓN). Si bien no señala su tipo, ya sea humano, restrictivo o prohibido, sin embargo, falta la fundamentación legal que sustente lo descrito por la autoridad pues no hizo las especificaciones tal y como se señala en el artículo 59 del Reglamento de Vialidad de Salamanca, Guanajuato.

Líneas abajo señaló las **circunstancias de tiempo y lugar lo siguiente:** “Siendo las 11:05 del día de hpy en atención al oficio girado por la empresa **XXXXXX** en relación a vehículos estacionados en sus instalaciones sin permiso se porcede con el vehículo de las características ya mencionadas en la cara pornicipal de este folio, se pasa a pensión **XXXXXX** por artículo 105 de reglamento de Transito y Vialidad” (sic). Sin embargo correspondía a la autoridad demandada ser más específico en cuanto a cómo había sido la falta cometida al reglamento de vialidad, pues no señala la manera en que no se respetó y por ende había sido infraccionado, pues menciona la existencia de un lugar prohibido, sin embargo, no da las características específicas para considerar que realmente se habla de un lugar así, además de no señalar cómo procedió para realizar la infracción, ante tal determinación, era necesario que la autoridad demandada expusiera, el tipo de lugar o señalamiento al que hace referencia y el describir cómo fue que el actor no respeto el mismo, pues el solo hecho de mencionarlo no da certeza de que se trata de un lugar prohibido y que sucedieran las cosas de esa manera pues se desconoce las características del lugar y el procedimiento realizado . Así pues, el motivo de infracción debe describirse pormenorizadamente y obrar en el documento en que conste el acto impugnado, lo que en el caso concreto no ocurrió. Además de mencionar que tipo de oficio y su

contenido pues no da certeza de su existencia.

Ello es así porque, de los enunciados plasmados en la boleta de infracción, no se desprenden razonamientos precisos que ilustran sobre el modo en que el agente se percató de que el actor cometió alguna infracción de tránsito, de modo tal que, relacionado con las normas de la materia, conduzcan a concluir que el conductor realmente infringió alguna disposición jurídica específica; siendo el caso que tal información debió contenerse en la boleta de infracción, lo que en la especie no ocurrió.

Por lo tanto, se concluye que la boleta de infracción no está debidamente fundada y motivada, pues los datos antes referidos no se localizan pormenorizadamente en el propio documento, lo cual resulta obligado según lo dispone la tesis jurisprudencial sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 139-144, Tercera Parte, página 201, con registro 237870, que por su analogía con lo aquí tratado, se cita a continuación:

**>>FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO.** Las autoridades responsables no cumplen con la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente las resoluciones que pronuncian, expresando las razones de hecho y las consideraciones legales en que se apoyan, cuando éstas aparecen en documento distinto. <<

En efecto, correspondía a la demandada indicar mediante un relato pormenorizado de cómo ocurrieron los hechos, para acreditar en el texto mismo del acto controvertido, asimismo como lo señala el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca Guanajuato.

“artículo 16: El personal de la Dirección elaborará la boleta de infracción correspondiente después de haber presenciado los hechos que actualizan el supuesto jurídico, por haber tenido conocimiento de estos y se asentarán en formato oficial foliado impreso con datos de identificación

de la Dirección, los siguientes requisitos: (...)

VIII. Motivación: descripción de los actos constitutivos de la infracción cometida; y," (...)

Sin embargo, lo señalado por el agente vial no conduce a concluir un adecuado señalamiento de motivos aunado a una breve relación de los hechos, ni tampoco se demuestra la existencia de una debida y clara motivación de cómo se percató que el hoy actor cometió la supuesta infracción. Así mismo en cuanto al señalamiento de la fecha como requisito de validez del acto administrativo la autoridad demanda omitió señalar el día.

Sirve de sustento al anterior razonamiento, por analogía, el Criterio emitido por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, publicado en el boletín de Criterios 2000-2007, página 222, y que a la letra dice:

**“MOTIVACIÓN DE UNA INFRACCIÓN DE TRÁNSITO, REQUISITOS QUE DEBE REUNIR PARA ACREDITAR UNA AGRESIÓN VERBAL.** Para acreditar la materialización de la agresión verbal a un Oficial prevista por el artículo 187, fracción III del Reglamento de Tránsito de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, es necesario que en la boleta de infracción se señalen las circunstancias de hecho, como qué Oficial recibió la agresión y en qué consistió ésta, para que ella contenga una debida motivación.”

En estos términos, para que la motivación sea suficiente y congruente, es necesario que en el propio cuerpo de la infracción se señalen en forma completa, las razones que sustenten su dicho y de las que pueda acreditarse la comisión de la totalidad de conductas imputadas. Se concluye por ello, que la motivación empleada, resulta insuficiente.

Por todo lo anterior, para efecto de que pudiera subsistir la presunción de legalidad de la que se encuentran investidos los actos administrativos, resulta necesario que la autoridad sujete su actuar a las formalidades contenidas en el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; para el presente asunto, particularmente haber motivado en forma suficiente, la totalidad de las circunstancias que acreditaran fehacientemente la comisión de las conductas imputadas.

A mayor abundamiento, cabe puntualizar que la fundamentación y motivación de la boleta de infracción debe contener, como se esclareció supralíneas, los siguientes elementos: a) preceptos legales aplicables; b) relato pormenorizado de los hechos, incluyendo elementos temporales, espaciales y circunstanciales; y, c) argumentación lógica jurídica que explique con claridad la razón por la cual los preceptos de ley tienen aplicación al caso concreto.

Lo anterior así se sostiene, pues limitarse a realizar las anotaciones como las que invocó la autoridad, sin una debida fundamentación y motivación, puede dar como resultado que un agente vial arbitrariamente elabore infracciones imponer la carga de efectuar un pago injustamente, así como imputar cualquier conducta sin detallar el sustento jurídico en que soporte su decisión.

No es óbice para arribar a esta conclusión el hecho de que la autoridad demandada al momento de su contestación en lo medular negó que la boleta de infracción 18787 se encontrara indebidamente fundada y motivada; y refiere que existe una contradicción entre lo señalado por el actor y el material probatorio, a su juicio existen elementos tendientes a evidenciar la legalidad de la conducta reprochada y que la negación lisa y llana hecha por el recurrente debe considerarse como calificada.

El argumento sostenido por la autoridad en cuanto a que nos encontramos en presencia de una negación que envuelve una afirmación **es infundado** atento a lo siguiente:

a) El artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que los actos administrativos se presumirán legales, sin embargo, las autoridades administrativas deberán probar los hechos en que los motiven cuando **el interesado los niegue lisa y llanamente**, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

b) Dentro del escrito de demanda <<foja 6>> capítulo de conceptos de impugnación, el justiciable de una forma clara y sin cortapisas negó lisa y

llanamente, por lo que, la presunción de legalidad del acto deja de operar revirtiendo a de esta manera a la demandada la carga de la prueba a fin de demostrar la existencia de los hechos y, por tanto, **la legalidad del acto administrativo**, situación que dentro del presente proceso no se acredita, pues del análisis de la boleta de infracción **XXXXXX** resulta indebidamente fundada y motivada atento a los argumentos antes expuestos en esta resolución.

Es importante señalar que dentro del presente proceso administrativo se ventila sobre la legalidad o ilegalidad del folio de infracción **XXXXXX**, de esta manera, por regla general le corresponde a la autoridad emisora del acto impugnado acreditar que el mismo cumplía con todos los elementos y requisitos de validez regulados por los artículos 137 y 138 Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Bajo ese contexto, la omisión o irregularidad de alguno de los elementos de validez trae como sanción la nulidad del acto administrativo, mismo que no podrá ser reemplazado por otro, tampoco subsanarse y por tanto, el impetrante no tiene la obligación de cumplirlo.

En consecuencia, los agravios esgrimidos por el actor resultan fundados referente a la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, en atención a que es en el propio acto donde de forma completa deben señalarse el ordenamiento legal aplicable y las razones y circunstancias pormenorizadas bajo las cuales se cometió una falta administrativa, lo anterior con fundamento en la fracción VI del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Como apoyo de lo anterior, se hace propio, el criterio que sostiene la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, contenida en la página 119 ciento diecinueve, de la publicación intitulada "Criterios 2000-2008" del referido Tribunal, la cual es del tenor siguiente:

**“INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- PROCEDE DECRETAR LA NULIDAD LISA Y LLANA.-** La ausencia de fundamentación y motivación deriva en el decretamiento de una nulidad para el efecto de que se emita otro acto debidamente fundado y motivado. Por su parte la indebida satisfacción de estos extremos, conduce a decretar una nulidad lisa y llana, ya que aquí el particular no requiere conocer los fundamentos y motivos de la afectación, sino que es sabedor de que los aplicados en el acto en concreto no son los adecuados.<sup>2</sup>”

En las relatadas circunstancias, es de concluirse que del contenido del acto combatido no se advierten elementos suficientes que demuestren que el hoy actor haya infringido algún ordenamiento legal.

Lo anterior encuentra sustento legal en la siguiente tesis:

**“TRANSITO, MULTAS DE.** Una infracción y una multa impuestas por el agente de tránsito como parte, testigo y Juez, en cuya acta se limita a asentar escuetamente "pasar alto con señal de semáforo", carece de motivación en realidad, pues por una parte no explica en forma clara y completa las circunstancias de la infracción y, por otra, sería una denegación de justicia y una renuncia al debido proceso legal, contra el texto de los artículos 14 y 16 constitucionales, obligar a un particular a pagar sin más una multa cuya motivación no es clara y en la que, como se dijo, el agente fue parte, testigo y Juez, sin que su dicho admita prueba eficaz y real (no simplemente teórica) en contrario.<sup>3</sup>”

Por las consideraciones vertidas, con fundamento en los artículos 143 párrafo primero, 300 fracción II y 302 fracciones II y IV, del multicitado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo procedente decretar la **NULIDAD TOTAL** del acto impugnado consistente en boleta de infracción **XXXXX**, elaborada por Miguel Angel **XXXXXXXXX** agente vial, adscrito a la Dirección de Vialidad de Salamanca, Guanajuato.

---

<sup>2</sup> (Exp. 4.509/02. Sentencia de fecha 09 nueve de mayo de 2003. Actor: Martha Isabel Espriu Manrique)

<sup>3</sup> Tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 121-126, Sexta Parte, página 233. Con registro número 252071

Asimismo, es procedente decretar la nulidad total de la calificación de boleta anulado, esto por ser producto de un acto viciado de origen y, por ende, no puede subsistir sin aquella que le dio origen.

Esta determinación se sustenta en el artículo 300 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 121-126 sexta parte; página 280, Séptima Época, con registro número 252103, que esta establece:

**“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.** Sí un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarán prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.”

-----

Por consiguiente, la declaración de nulidad total del acto impugnado, produce como consecuencia que al actor ya no se le aplique ninguna sanción administrativa por los hechos indicados en el folio de infracción sobre el cual recayó la nulidad lisa y llana.

**SEXTO.** Dentro del escrito inicial de demanda el ahora actor solicito como reconocimiento de derecho lo siguiente:

- a)** el reconocimiento de derecho para que le sea devuelta la cantidad de **\$695.00 (seicientos noventa y cinco pesos 00/100 en moneda nacional)**, misma que erogó por concepto de la multa que aparejós el acto impugnado.
  
- b)** el derecho para que la autoridad se abstenga de hacer cualquier tipo de registro de carácter negativo o perjudicial, o bien si ya se realizó se proceda a su



cancelación dentro del libro de sanciones administrativas del municipio de Salamanca, Guanajuato.

En cuanto al inciso a) el actor acreditó el pago de la multa aportando al sumario ejemplar original consistente en comprobante fiscal con referencia AA657690 de fecha 28 veintiocho de julio de 2020 dos mil veinte, documento que se le concede valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 78, 117 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, creando convicción en esta juzgadora respecto a que tal pago corresponden al mismo acto administrativo que ha quedado anulado y por ende constituye ahora, producto de un acto viciado que el accionante injustamente se vio obligado a resentir.

Por lo que respecta a la no inscripción y/o cancelación de los antecedentes administrativos, ***ha lugar al reconocimiento*** del derecho, en atención a los siguientes argumentos:

Toda actuación policial se asienta en documentos oficiales para su debido registro en las plataformas destinado para ellos, tal y como se desprende del artículo 40, fracción IX de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y lo correlativo al numeral 85 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, que a la letra establecen:

**De la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.**

**De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública**

<< **Artículo 40.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y

respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

**XIX.** Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables.

### **De la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato.**

#### ***Colaboración en materia de registro de antecedentes de tránsito***

**Artículo 85.** Con la finalidad de contar con información oportuna y suficiente para prevenir accidentes de tránsito, así como para detectar a los infractores reincidentes, la Policía Estatal de Caminos, y los municipios, se apoyarán en el registro estatal de antecedentes de tránsito...>>

Por ende, una vez que ha quedado anulada la boleta de infracción y el total de su contenido, SE RECONOCE EL DERECHO DE LA PARTE ACTORA, a que la autoridad demandada se abstenga de realizar o colaborar en la inscripción de antecedentes de tránsito y en el supuesto de haberse inscrito la sanción materia del presente juicio, PROCEDA A SU CANCELACIÓN TODA VEZ QUE HA QUEDADO ANULADA CON MOTIVO DE LA PRESENTE SENTENCIA.

En esa tesitura y derivado de los argumentos esgrimidos por esta juzgadora, **se condena a la autoridad demandada (agente vial)** a realizar las gestiones necesarias a fin de que realice al actor, la devolución de las cantidades de **\$695.00 (seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 en moneda nacional), que deberá de ser entregada mediante título nominativo –cheque- en favor del justiciable o en efectivo**, lo anterior con la finalidad de no imponer cargas al actor para el cumplimiento de la presente sentencia

**Debiendo adoptar la autoridad demanda todas las medidas que sean necesarias para el pleno restablecimiento del derecho reconocido, pudiendo**

**auxiliarse de otras autoridades para el cabal cumplimiento de esta sentencia.**

Encuentra aplicación por analogía al caso concreto, el criterio expedido por el H. Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del rubro y texto siguientes:

**«DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DE LA QUE EMANÓ EL ACTO ANULADO REALIZAR LAS GESTIONES PARA.-** Sí el actor ocurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a efecto de solicitar el reembolso del pago que realizó, por considerar que la infracción del que provino era ilegal, resulta correcto que el A quo condenara a su devolución a la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, y no a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, pues el acto de autoridad (imposición y calificación de la infracción), por el cual el actor enteró esa cantidad al erario estatal, fue emitido por el titular de esa Dirección, no así la mencionada Secretaría, la que, en todo caso, se limitó a cumplir con su cometido de recaudar los ingresos estatales, como dispone el artículo 5º del Código Fiscal del Estado, por lo que corresponde a esa Dirección General de Tránsito y Transporte, realizar las gestiones necesarias para que quede sin efectos el pago realizado a la autoridad recaudadora y se devuelva al actor la cantidad cuyo acto de origen fue declarado ilegal.<sup>4</sup>»

En base a lo antes expuesto, la autoridad deberá informar sobre el cumplimiento otorgado al presente considerando, **en un término de cinco días hábiles** contados a partir de aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

---

<sup>4</sup> (Toca 136/07. Recurso de Revisión interpuesto por Daniel García Razo, en su carácter de autorizado del Director General de Tránsito y Transporte del Estado. Resolución de fecha 9 de enero de 2008).”

**RESUELVE:**

**PRIMERO.** Este Juzgado Administrativo Municipal resulta competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, atento a lo dispuesto por el considerando primero de esta sentencia.

**SEGUNDO.** **No se sobresee** el proceso, de acuerdo con lo asentado en el **CONSIDERANDO TERCERO** de este fallo.

**TERCERO.** Se declara la **NULIDAD TOTAL** de la boleta de infracción **XXXXX**, en los términos de lo manifestado en los **CONSIDERANDO QUINTO**.

**CUARTO.** Ha lugar al **RECONOCIMIENTO DEL DERECHO** de la parte actora, Y **A LA CONDENA** de las pretensiones declaradas procedentes, en los términos manifestados en el **CONSIDERANDO SEXTO**.

NOTIFÍQUESE A LAS PARTES. - - - - -

En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y dese de baja del Libro de Registro de este órgano de control de legalidad.

Así lo resolvió y firma la Licenciada **Estephania Nuñez Diosdado**, Juez Administrativo Municipal de Salamanca, Guanajuato, quien actúa asistido en forma legal con Secretaria de Estudio y Cuenta, Licenciada **Lesli Haydé Leticia Valadez Dávalos**, quien da fe. - - - - -